



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veinte y siete (27) de agosto de dos mil veinte (2020)

Referencia:	Acción popular
Radicado:	15001 33 33 002 2018 00032 00
Demandante:	Yesid Figueroa García
Demandado:	Municipio de Tunja – Veolia Aguas de Tunja - Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-

Ingresa el proceso con informe secretarial, para resolver las solicitudes de: i) adición, complementación del dictamen elevada por el actor popular y ii) pago total de honorarios al auxiliar de la justicia Andrés Leonardo Silva Balaguera.

1. ANTECEDENTES

De acuerdo al escrito introductorio, la presente acción popular se interpuso con el fin de lograr la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de espacio público y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes; luego, su objeto es el estado, la intervención, recuperación y demás que requieran los siguientes bienes y espacios públicos de la ciudad Tunja: *“barandas peatonales presentes en el costado oriental de la Carrera 19 entre Calles 23 a 33, barandas peatonales ubicadas en los costados de la avenida Norte desde el puente de Santa Inés (segmentos ubicados en la parte oriental de la avenida, el límite con el puente Santa Inés y los ubicados en los extremos del río la Vega), las mallas peatonales de los separadores de los puentes de Santa Inés, UPTC, y el de la Avenida Oriental con Calle 24, barandas del costado hacia la Avenida Norte del Parque Recreacional, Parque Santander, **Parque Bicentenario**, Parque de los Semáforos, Plazoleta de las Nieves o Plazoleta Muisca, sendero peatonal (andenes) ubicado entre la Calle 20 entre Carrera 12 a Carrera 14”*

En el acápite de fundamentos fácticos se hizo referencia a cada uno de los espacios públicos, señalando en el hecho 26 que el **Parque Bicentenario se encontraba ubicado en el Barrio Cooservicios del municipio de Tunja.**

En audiencia especial de pacto de cumplimiento celebrada el 7 de marzo de 2019, se dio apertura al período probatorio y se decretó, entre otros elementos de convicción, un dictamen pericial que debía practicarse sobre los parques Bicentenario, de los Semáforos, Santander, así como la Plazoleta de las Nieves o Plazoleta Muisca y sendero peatonal (andenes) de la calle 20 entre carreras 12 y 14 colindante con el centro comercial de la Plaza Real.

La realización de la experticia fue encomendada a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la cual designó al ingeniero Andrés Leonardo Silva Balaguera, auxiliar de la justicia que fue posesionado en audiencia llevada a cabo el 18 de junio de 2019, en la que se puso en conocimiento el cuestionario que debía responder, y señalando frente al parque Bicentenario que debía *“Determinar y evaluar los tipos de intervención, reparaciones o intervenciones preventivas que deban llevarse a cabo respecto de los hundimientos y agrietamientos de los pisos y pasos peatonales de la parte Norte del Parque Bicentenario”*

Posteriormente, mediante auto de 1 de agosto de 2019, se dispuso que la carga de sufragar los gastos y honorarios que ocasionara la prueba pericial decretada estaría en cabeza del municipio de Tunja y Veolia Aguas de Tunja.

Ahora bien, en el informe aportado por el perito el 10 de octubre de 2019 se indicó que el objeto de la solicitud pericial recaía, entre otros, sobre el **parque Bicentenario (parque Biblioteca)** y, en consecuencia, efectuó la experticia respecto al espacio público *“ubicado en la zona este del parque recreacional con coordenada 5°32'45.01"N y 73°21'32.80"W.”* Sin embargo, el día 21 del mismo mes y año, el actor popular realizó solicitud de complementación, adición y aclaración del dictamen pericial, argumentado, entre otras cosas, que se presentó una confusión respecto al parque Bicentenario, comoquiera que no correspondía al Parque Biblioteca, ya que como podía observarse en los hechos 26 a 30 de la demanda, se trataba del parque Bicentenario ubicado en el barrio Cooservicios, por consiguiente, solicitó que se efectuó sobre dicho bien el mismo estudio que se adelantó respecto a los demás bienes públicos relacionados de la demanda.

El 14 de noviembre de 2019 se llevó a cabo audiencia de contradicción del dictamen, en la que a partir del minuto 1:18:13 de la parte 3, se permitió a las intervinientes solicitar al aclaraciones y adiciones al dictamen pericial, concediéndole el uso de la palabra al actor popular, quien para efecto de complementar interrogó al perito respecto a la utilidad y necesidad de efectuar los diferentes tipos de estudios a los espacios públicos objeto de la acción popular; seguidamente, la juez indicó que esta etapa se podían solicitar las complementaciones del caso, momento en el cual el accionante señaló no tener ninguna; una vez el experto contestó las preguntas de los apoderados de los accionantes, del delegado de la Defensoría del Pueblo y del Despacho, se dio la oportunidad de proponer objeciones, pero ningún asistente las propuso.

Posteriormente, se procedió a fijar la suma equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes como honorarios del perito, indicando que previo a poner el dinero a disposición del mismo se debía oficiar a la UPTC para que informara si algún porcentaje de los honorarios debían consignarse a la universidad, luego de lo cual la alcaldía de Tunja y Veolia Aguas de Tunja contaban con 20 días para efectuar el correspondiente pago.

Acto seguido, el actor popular interpuso recurso de reposición en el sentido de que estaba pendiente la evaluación del parque Cooservicios y afirmó que los honorarios debían ser superiores. Luego del correspondiente traslado, el Despacho resolvió el recurso en el sentido de no reponer la decisión relativa al monto de los honorarios y rechazó por extemporánea la solicitud de complementación del dictamen.

De otra parte, en la referida audiencia, se dispuso oficiar al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja para que certificara el estado en que se encontraba la acción popular 2018-00093, aportara la demanda y en caso de que se hubiera proferido fallo, la correspondiente sentencia con constancia de ejecutoria.

A través de oficio radicado el 25 de noviembre de 2019, el director Jurídico de la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia indicó que los honorarios fijados por el Despacho al perito designado debían ser pagados en su totalidad a dicha institución, y que el depósito podía realizarse en la cuenta corriente 855-008423-88 de Bancolombia

Mediante providencia de 28 de noviembre de 2019, la titular del Juzgado Segundo Administrativo de Tunja se declaró impedida para conocer el presente asunto, toda vez que presentó denuncia penal contra el actor popular, en consecuencia, el proceso fue remitido al homologo Juzgado Tercero.

Por su parte, la titular del Juzgado Tercero Administrativo, mediante auto de 13 de febrero de 2020, aceptó el impedimento formulado por el Juez Segunda y, a su vez, declaró configurada la causal de impedimento prevista en el numeral 2.º del artículo 141 del CGP, comoquiera que su compañero permanente fue nombrado como secretario de despacho del municipio de Tunja, motivo por el cual ordenó la remisión de la diligencias a este Despacho.

Con escrito radicado el 9 de marzo de la presente anualidad, el accionante solicitó que se ordenará al perito designado por la UPTC complementar el dictamen pericial, de conformidad con lo manifestado en el memorial de 21 de octubre de 2019, con relación al **parque Centenario ubicado en el Barrio Cooservicios o mejor conocido como Multiparque**, señalando que tal complementación había sido negada de forma errónea, toda vez que la solicitud se efectuó dentro del término que corrió del 15 al 21 de octubre de 2019. Adicionalmente, indicó que la experticia debía ser sustentada en audiencia pública, en la cual se debían fijar nuevamente los honorarios del perito, de acuerdo a las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

A través de auto de 12 de marzo de 2020, este Juzgado avocó el conocimiento del asunto y solicitó al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos que efectuara la compensación del proceso, luego de lo cual el expediente debía ingresar al Despacho a fin de continuar con el trámite de la acción.

Ahora bien, en curso de esta actuación, mediante la Resolución No 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 y mitigar sus efectos.

Como consecuencia de lo anterior, a través de Acuerdo PCSJA20-11517 de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la suspensión de términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el día 20 del mismo mes y año, salvo en aquellos despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tuvieran programadas audiencias con persona privada de la libertad. Adicionalmente, se exceptuó el trámite de acciones de tutela.

Esta medida de suspensión de términos judiciales se prorrogó en distintas ocasiones, mediante los Acuerdos PCSJA20-11518, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA-11556 de 2020, por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia por el COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial.

Por medio de Acuerdo PCSJA-11567 de 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del día 1.º de julio de 2020, inclusive, y dispuso las medidas pertinentes para la reanudación de la atención al público, el normal funcionamiento de los despachos judiciales y se dictaron otras medidas de salubridad pública y fuerza mayor.

A través del Decreto Legislativo No 806 de 04 de junio 2020, el Gobierno Nacional adoptó unas medidas de orden procesal para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Mediante Acuerdo PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ratificó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del 1.º de julio de 2020, y puntualizó que las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial no prestarán atención presencial a usuarios, a menos que de manera excepcional se requiera.

Por último, el actor popular, a treves de escrito remitido al correo electrónico el 6 de julio del corriente año, reiteró la solicitud de adición del dictamen pericial, y el ingeniero Andrés Leonardo Silva Balaguera, mediante escrito de 14 de julio de hogaño, solicitó el pago total de los honorarios fijados en el proceso, argumentando que las actividades para rendir el informe pericial fueron desarrolladas en horarios externos a los que cumplía como docente la UPTC, (horario nocturno, días sábados y

domingos), asimismo, informó que la mentada universidad no realizó ninguna bonificación monetaria, ni lo exoneró de horario laboral para la realización del dictamen.

2. CONSIDERACIONES

El artículo 32 de la Ley 472 de 1998 regula aspectos generales de la prueba pericial en materia de acciones populares, así:

“ARTICULO 32. PRUEBA PERICIAL. *En el auto en que se decrete el peritazgo se fijará la fecha de entrega del informe al juzgado y a partir de esta fecha estará a disposición de las partes durante cinco (5) días hábiles. El informe del perito deberá rendirse en original y tres copias.*

Los informes técnicos se valorarán en conjunto con el acervo probatorio existente, conforme a las reglas de la sana crítica y podrán tenerse como suficientes para verificar los hechos a los cuales se refieren.

El segundo dictamen es inobjetable y el juez podrá acogerlo en su sentencia.

(...).”

Por tanto, el cuerpo normativo en mención no hizo referencia a lo concerniente a la contradicción del dictamen, por consiguiente, en aplicación de la remisión normativa contenida en el artículo 44 *ibídem*¹, este trámite debe surtirse, de conformidad con lo previsto en el artículo 220 de la Ley 1437 de 2011, norma que en los incisos 2.º y 3.º dispone:

“2. Durante la audiencia de pruebas se discutirán los dictámenes periciales, para lo cual se llamará a los peritos, con el fin de que expresen la razón y las conclusiones de su dictamen, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento. Los peritos tendrán la facultad de consultar documentos, notas escritas y publicaciones y se pronunciarán sobre las peticiones de aclaración y adición, así como la objeción formulada en contra de su dictamen. Si es necesario, se dará lectura de los dictámenes periciales.

Al finalizar su relato, se permitirá que las partes formulen preguntas a los peritos, relacionadas exclusivamente con su dictamen, quienes las responderán en ese mismo acto. El juez rechazará las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Luego el juez podrá interrogarlos.

¹ **“ARTICULO 44. ASPECTOS NO REGULADOS.** *En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones.”*

3. Cuando la prueba pericial hubiese sido decretada por el Juez, se cumplirá el debate de que trata el numeral anterior en la audiencia de pruebas. En esa misma audiencia, las partes podrán solicitar adiciones o aclaraciones verbales al dictamen y formular objeción por error grave, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 222 de este Código. (Se destaca)

Ahora, en aplicación de la mentada remisión normativa, los honorarios de los peritos deben determinarse según lo reglado en el artículo 221 del CPACA, el cual señala que *“los honorarios del perito se fijarán en el auto de traslado de las aclaraciones o complementaciones al dictamen, cuando estas hayan sido solicitadas; o una vez vencido en termino para solicitar las aclaraciones y complementaciones, cuando no se soliciten”*.

IV. CASO CONCRETO

- Solicitud de adición del dictamen

De acuerdo con los antecesos expuestos, se encuentra que el día 14 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de sustentación y contradicción del dictamen, en la que se surtieron debidamente las etapas de aclaración y complementación, y se otorgó la palabra a los intervinientes para los efectos del caso.

En esa oportunidad, la entonces juez de conocimiento insistió en señalar al actor popular que le fue otorgada la palabra para que, de considerarlo pertinente, solicitara adición al informe pericial; no obstante, a pesar de que con anterioridad a la audiencia el actor popular había señalado que el informe técnico estaba incompleto, pues faltaba realizar los estudios sobre el parque ubicado en el barrio Cooservicios de Tunja, indicó que no solicitaría adición alguna.

Así las cosas, al estimar que el dictamen pericial fue una prueba decretada por el juzgado, conforme a lo preceptuado en el inciso 3.º del artículo 220 del CPACA, el momento procesal para formular adiciones y solicitar aclaraciones y adiciones era la referida audiencia, por tanto, como en la respectiva de la diligencia no se efectuó la solicitud de adición, es claro que la oportunidad precluyó y, en esa medida le asistía razón a la juez, cuando decidió rechazar por extemporánea la solicitud de adición que se efectuó después de haber fijado los honorarios del perito.

Con todo, a juicio de este Despacho, no puede desconocerse que el actor popular reiteró, según los hechos de la demanda, que el denominado Parque Bicentenario estaba ubicado en el barrio Cooservicios de la ciudad de Tunja y, aunque este espacio público es conocido como **Parque Centenario o Multiparque**, de manera que no se hacía referencia al parque La Biblioteca – Skate Park², sobre el cual el auxiliar de la justicia rindió el respectivo informe, pues este no está ubicado en dicho

² <https://www.tunjatesoroscondidos.com/index.php/parques-y-escenarios/252-parque-la-biblioteca-skate-park>.

barrio. Luego, el dictamen pericial rendido por el ingeniero Andrés Leonardo Silva Balaguera se encuentra incompleto y es necesario contar con la valoración de la totalidad de los espacios públicos referidos en la demanda, a fin de adoptar la correspondiente decisión de fondo.

En este orden, en atención a la naturaleza de la acción popular, su origen constitucional y la relevancia de las garantías que protege, cuya titularidad no recae en el demandante, sino en la sociedad en general, y en uso de las amplias facultades otorgadas juez de la acción popular, en los términos del artículo 5.º de la Ley 472 de 1998, que permiten aplicar los principios de prevalencia del derecho sustancial y de eficacia³, a fin de garantizar y hacer efectivos los derechos colectivos invocados en la demanda se ordenará al ingeniero civil Andrés Leonardo Silva Balaguera, quien funge como auxiliar de a justicia en la presente acción constitucional, que adicione el informe pericial aportado el 10 de octubre de 2019, en el sentido de determinar y evaluar los tipos de intervención, reparaciones o intervenciones preventivas que deban llevarse a cabo respecto de los hundimientos y agrietamientos de los pisos y pasos peatonales del Parque Centenario o Multiparque ubicado en el barrio Cooservicios de la ciudad de Tunja.

- Pago de honorarios

En atención a que tanto la Universidad Pedagógica de Colombia como el ingeniero Andrés Leonardo Silva Balaguera solicitaron el pago total de los honorarios fijados en la audiencia de 14 de noviembre de 2019, previo a resolver sobre este aspecto se oficiará al ente universitario para que informe la existencia de algún acto administrativo que regule lo concerniente al pago de los honorarios reconocidos a los profesionales designados por la entidad para la realización de dictámenes periciales dentro de procesos judiciales. En caso afirmativo deberá aportar la copia del mismo, o, en su defecto, informará el procedimiento interno para tal efecto y el porcentaje que es reconocido al experto encargado de rendir el informe técnico o los beneficios que son otorgados a los profesionales adscritos a la institución cuando fungen como auxiliares de la justicia.

- Otras determinaciones

El Despacho advierte que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja no ha dado respuesta al oficio N.º 1120/ 2018-0032 de 15 de noviembre de 2019, remitido a través de la Oficina de Centro de Servicios el 18 del mismo mes y

³ La Corte Constitucional en Sentencia T-443 de 2013, al respecto señaló: “...Se debe tener en cuenta que las acciones populares poseen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto son un mecanismo de protección de los derechos colectivos, radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza de quien actúa a nombre de la sociedad, pero de los que al mismo tiempo son titulares cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial. **En consecuencia, como director del proceso, el juez puede conminar, exhortar, recomendar o prevenir, a fin de evitar una eventual vulneración o poner fin a una afectación actual de los derechos colectivos que se pretenden proteger, sin que tal decisión constituya un capricho del juez constitucional. Es así como, un elemento esencial de las acciones populares es el carácter oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes y con miras a la defensa de los derechos colectivos...**” (Se destaca)

año. En tal virtud se dispondrá requerir a la dicha autoridad judicial para que se sirva allegar con destino a este proceso los siguientes documentos: i) copia de la demanda presentada dentro de la acción popular N.º 2018-0093, ii) certificación del estado en el que se encuentra dicho proceso y iii) en caso de haberse proferido sentencia, copia de la misma.

Finalmente, el Despacho aceptará la renuncia al poder conferido por el municipio de Tunja, presentada la abogada Paola Alejandra Garrido Cuesta, comoquiera que cumple la exigencia prevista en el artículo 76 del CGP, consistente en la comunicación enviada al ente territorial.

De conformidad con lo antes expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Ordenar al ingeniero civil Andrés Leonardo Silva Balaguera, auxiliar de la justicia dentro de la presente acción constitucional, que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación, **adicione** el informe pericial aportado el 10 de octubre de 2019, en el sentido de determinar y evaluar los tipos de intervención, reparaciones o intervenciones preventivas que deban llevarse a cabo respecto de los hundimientos y agrietamientos de los pisos y pasos peatonales del Parque Centenario o Multiparque ubicado en el Barrio Cooservicios de la ciudad de Tunja. Comunicar al perito esta determinación mediante oficio.

SEGUNDO.- Oficiar a la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia para que, en el término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación, informe al Despacho si existe algún acto administrativo que regule lo concerniente a la consignación de los honorarios reconocidos a los profesionales designados por la entidad para la realización de dictámenes periciales dentro de procesos judiciales, en caso afirmativo deberá aportar la copia del mismo.

En caso de que no exista normatividad interna, informará el procedimiento establecido por la universidad para tal efecto y el porcentaje que es reconocido al experto que rinde el informe técnico, o los beneficios que son otorgados a los profesionales adscritos a la institución cuando fungen como auxiliares de la justicia.

TERCERO.- Requerir al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, para que en el término de cinco días, contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación, se sirva dar respuesta al oficio N.º 1120/ 2018-0032 de 15 de noviembre de 2019 y, en consecuencia, allegue con destino a este proceso los siguientes documentos: i) copia de la demanda presentada dentro de la acción

popular N.º 2018-00093, ii) certificación del estado en el que se encuentra dicho proceso y iii) en caso de haberse proferido sentencia, copia de la misma.

CUARTO.- Aceptar la renuncia presentada por la abogada Paola Alejandra Garrido al poder conferido por el municipio de Tunja.

Notifíquese⁴ y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

561c2fba4da6f15a976910078e37ee3877f96b3757cfb9ee7dd7e62d816ecb80

Documento generado en 27/08/2020 05:20:29 p.m.

4

<p>Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>La anterior providencia se notifica por estado electrónico N.º 23 de hoy 28 de agosto de 2020, a las 8:00 a. m.</p> <p>FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario</p>
